

Colombia: Los Votos de la Guerra

www.360geopolitica.org

De cara a las elecciones de 2026, destacados medios de comunicación y plataformas de análisis –como *El Tiempo*, *El Espectador*, *Semana* y *360° Geopolítica*– advierten que la competencia democrática en Colombia está siendo eclipsada por el conflicto armado. Sus reportes describen un panorama en el que actores armados ilegales han ampliado su control territorial en importantes regiones del país, desafiando la soberanía colombiana bajo la actual política de Paz Total del presidente Petro.

Según *El Espectador* (30 de mayo de 2026), organizaciones armadas y estructuras criminales ejercen distintos grados de influencia sobre al menos 190 municipios. Adicionalmente, las clasificaciones de riesgo identifican 69 municipios que requieren intervención inmediata, 168 que necesitan acciones urgentes y 433 municipios catalogados como zonas prioritarias debido a la presencia o influencia de actores criminales.

Estas cifras son citadas con frecuencia como evidencia de la magnitud de la fragmentación territorial que afecta la gobernabilidad y las condiciones electorales.

Un informe de inteligencia independiente, citado por *Semana* (6 de junio de 2026), aporta más detalles sobre este panorama de seguridad. El documento concluye que entre 2022 y 2025 las organizaciones armadas ilegales expandieron tanto su capacidad operativa como su alcance territorial.

El informe estima un aumento del 87 % en sus capacidades operacionales y una expansión del 36 % en su presencia territorial, con grupos armados operando actualmente en más de 420.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 40 % del territorio nacional, aunque influyendo sobre áreas aún mayores mediante mecanismos de control informal y capacidad coercitiva.

Asimismo, identifica al Clan del Golfo, al ELN y a las disidencias de las FARC como los principales actores detrás de esta expansión, señalando que su membresía conjunta habría pasado de aproximadamente 13.000 integrantes en 2022 a más de 27.000 en 2025.

Dentro de este marco, diversos analistas sostienen que estas dinámicas territoriales tienen implicaciones directas sobre el comportamiento electoral. En regiones como Caquetá, Guaviare y Putumayo, reportes locales y documentación de campo describen entornos donde el voto puede verse condicionado por intimidación, coerción o presión política ejercida por grupos armados que operan en zonas con limitada presencia estatal.

Estas condiciones son citadas con frecuencia como elementos centrales para comprender cómo se producen los resultados electorales en territorios geográficamente disputados.

La controversia política también ha girado en torno a acusaciones sobre la relación entre actores armados y los procesos electorales. Críticos y algunas investigaciones periodísticas, incluidas las discutidas por *360° Geopolítica*, hacen referencia al denominado “Pacto de La Picota” como un ejemplo de presuntas interacciones entre campañas políticas y organizaciones criminales durante el ciclo electoral de 2022.

Una de las afirmaciones más citadas dentro de este debate es la aseveración –supuestamente realizada por familiares del presidente Petro– de que dichos acuerdos podrían haber influido en aproximadamente un millón de votos. Estas afirmaciones siguen siendo políticamente explosivas y continúan moldeando interpretaciones polarizadas sobre la historia electoral reciente de Colombia.

Las elecciones legislativas de 2026 han intensificado aún más estas disputas. Algunos análisis citados en el debate público sostienen que aproximadamente 2,4 millones de votos obtenidos por la coalición Pacto

Histórico provinieron de 126 municipios bajo distintos grados de influencia de grupos armados ilegales (*Semana*, 18 de abril de 2026). Aunque estas cifras son objeto de controversia, con frecuencia se utilizan para cuestionar la integridad de la competencia electoral en territorios de alto riesgo.

Una controversia adicional surgió a partir de los patrones de votación observados en regiones afectadas por el conflicto durante el ciclo electoral de 2026. Según datos reportados por diversos medios colombianos con base en resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), Iván Cepeda obtuvo el 100 % de los votos en 218 mesas de votación, muchas de ellas ubicadas en municipios afectados por el conflicto armado en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.

Analistas señalaron que varias de estas zonas presentan una presencia documentada de grupos armados ilegales y debilidad institucional. No obstante, estas cifras han alimentado el debate sobre las condiciones en las que se desarrolla la participación electoral en territorios donde actores coercitivos mantienen una influencia significativa sobre las poblaciones locales.

El entorno general de seguridad también ha estado marcado por episodios de violencia política de alto perfil. El asesinato del senador de oposición y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay es ampliamente reconocido como un acontecimiento decisivo dentro del ciclo electoral, al alterar la dinámica de campaña e intensificar el debate nacional sobre seguridad y estabilidad política. Las interpretaciones sobre sus consecuencias políticas varían, pero su impacto sobre el tono y el enfoque de la campaña ha sido ampliamente reconocido.

En conjunto, estos acontecimientos apuntan a una condición estructural en la que la política electoral y el control territorial están profundamente entrelazados. Con cientos de municipios clasificados como de alto riesgo, grupos armados expandiéndose sobre aproximadamente el 40 % del territorio nacional y acusaciones de influencia coercitiva sobre parte del voto, las elecciones colombianas de 2026 son analizadas cada vez más no solo como una competencia entre proyectos políticos, sino como una prueba de si la participación democrática puede aislarse plenamente del poder territorial armado.

En este contexto, el desafío central ya no se limita a la competencia electoral en sentido formal, sino a determinar si el comportamiento electoral en amplias zonas de Colombia puede desvincularse de manera efectiva de estructuras locales de poder coercitivo que continúan moldeando las realidades políticas, sociales y de seguridad en extensas porciones del territorio nacional.

El panorama electoral de 2026 se ha endurecido hasta convertirse en un juego de suma cero. En los principales centros urbanos, la movilización agresiva en las calles y una comunicación política de alta intensidad han transformado la campaña en una auténtica olla de presión ideológica. La campaña Petro-Cepeda enfrenta denuncias por utilización de recursos estatales para inclinar la balanza política en su favor, en medio de acusaciones de extralimitación institucional.

En este escenario volátil, incluso una simple protesta callejera se convierte en una prueba de interpretación: para sus simpatizantes representa una expresión democrática esencial; para sus críticos, una señal encubierta de desorden civil.

Esta fragmentación total de las narrativas –donde cada acto político es presentado simultáneamente como un deber cívico, un abuso gubernamental o una amenaza a la estabilidad nacional– configura un escenario explosivo para el enfrentamiento definitivo: una segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella y la coalición Petro-Cepeda.

360° Geopolítica.